

Expediente: **5198/24**

Carátula: **BANCO CREDICOOP COOP. LTDO. C/ VALCATEL S.R.L. Y OTROS S/ COBRO EJECUTIVO**

Unidad Judicial: **OFICINA DE GESTIÓN ASOCIADA EN DOCUMENTOS Y LOCACIONES N° 1**

Tipo Actuación: **SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS**

Fecha Depósito: **27/08/2025 - 00:00**

**Notificación depositada en el/los domicilio/s digital/es:**

27178586268 - *BANCO CREDICOOP COOP. LTDO., -ACTOR*

90000000000 - *VALCATEL S.R.L., -DEMANDADO*

90000000000 - *RUIZ, Ana Carolina del Valle-DEMANDADO*

90000000000 - *VALENTINI, PABLO ALEJANDRO-DEMANDADO*

90000000000 - *CAMACHO, Jose Gustavo-DEMANDADO*

27178586268 - *WERBLUD, GRACIELA RAQUEL-POR DERECHO PROPIO*

## **PODER JUDICIAL DE TUCUMÁN**

CENTRO JUDICIAL CAPITAL

Oficina de Gestión Asociada en Documentos y Locaciones N° 1

ACTUACIONES N°: 5198/24



H106018656760

**JUICIO: BANCO CREDICOOP COOP. LTDO. c/ VALCATEL S.R.L. Y OTROS s/ COBRO EJECUTIVO.-  
EXPTE. N° 5198/24.-**

### **Juzgado Civil en Documentos y Locaciones I**

San Miguel de Tucumán, 26 de agosto de 2025.

**Y VISTOS:** para resolver los presentes autos de los que;

### **RESULTA**

En fecha 30 de octubre de 2024, se presenta en autos la Dra. Graciela Raquel Werblud, en carácter de apoderada del Banco Credicoop Cooperativa Limitada, acompañando el respectivo poder general para juicios. En dicha oportunidad, al promover demanda por cobro ejecutivo de pesos contra Valcatel S.R.L., Pablo Alejandro Valentini, Ana Carolina del Valle Ruiz y José Gustavo Camacho, formula planteo de inconstitucionalidad respecto de los artículos 7 y 10 de la Ley N.º 23.928, modificados por la Ley N.º 25.561, por considerar que tales normas lesionan gravemente el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad de su mandante, en violación de los artículos 14, 16, 17 y 18 de la Constitución Nacional.

Manifiesta que como es de público conocimiento, las leyes 23.928 y 25.561 dictadas en 1991 y 2002 establecieron la prohibición normativa de indexar el capital de obligaciones de dar sumas de dinero. Añade que dichas leyes fueron emitidas en momentos históricos en los cuales las circunstancias económicas justificaban su existencia; pero que sin embargo, a la luz de la actualidad económica, su

sostenimiento no se condice con la realidad, vulnerando gravemente el derecho de propiedad de los acreedores. Es así que, según afirma, su aplicación indeclinable deriva, en muchos casos, en la imposibilidad de obtener una compensación acorde al perjuicio económico sufrido.

Entiende que resulta lógico que si el proceso inflacionario que atraviesa o ha atravesado en años pasados nuestra economía no puede ser controlado por políticas de estado, negarlo en el ámbito judicial consolida una asimetría con la realidad que afecta la propiedad privada de todo acreedor que no recibe el pago de su crédito en tiempo y forma, lo que a su vez resulta muy seductor para cualquier deudor en un proceso inflacionario, provocando finalmente un enriquecimiento incausado del obligado al pago. En sustento de su postura, cita jurisprudencia de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires la cual, según refiere, ha reconocido la necesidad de morigerar los efectos confiscatorios que puede generar la aplicación mecánica del régimen legal desindexatorio.

Agrega que en el caso particular resulta evidente el menoscabo sufrido por su representado, lo cual surge al comparar el poder adquisitivo del capital originalmente adeudado a la fecha de mora con el valor que arroja ese mismo capital, sin actualizar, aún considerando los intereses reclamados. Explica que esa diferencia se traduce, por ejemplo, en una cantidad de Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM) notablemente superior al momento del incumplimiento, en contraste con la cantidad de SMVM equivalentes al monto actual reclamado. Similar desvalorización —según afirma— puede constatarse frente a otros precios de referencia de la economía nacional (como el litro de leche, el kilo de carne, etc.) o mediante los índices oficiales publicados por el INDEC o por organismos estadísticos provinciales.

En virtud de todo lo expuesto, solicita se declare la inconstitucionalidad de las normas citadas y como consecuencia de ello, se disponga la actualización del capital reclamado conforme el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), el Índice de Precios al Consumidor (IPC), o el mecanismo que estime V.S. más adecuado, con más los intereses correspondientes, a fin de asegurar la integridad del crédito ejecutado. Formula reserva del caso federal.

Corrido el pertinente traslado del planteo mediante cédula SAE del 28 de marzo de 2025, la demandada guardó silencio y no respondió la vista conferida.

Consultada la Sra. Agente Fiscal, (SAE 06/08/25), efectuó una reseña de las disposiciones contenidas en los artículos 7 y 10 de la mencionada ley así como del artículo 5 del Decreto 214/02, destacando que tales disposiciones consagran la prohibición expresa de toda forma de actualización monetaria, indexación por precios o repotenciación de deudas, sin admitir cláusulas contractuales o normativas en contrario. En sustento de su posición, la Sra. Fiscal citó el precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Massolo” (Fallos 333:447), en el que se ratificó la constitucionalidad del régimen de prohibición de indexación, al sostenerse que la conveniencia de las políticas legislativas no está sujeta a revisión judicial.

También hizo referencia a la jurisprudencia local, que reiteró la validez de dichas disposiciones como manifestación del ejercicio legítimo del Congreso Nacional conforme al art. 75 inc. 11 de la Constitución Nacional (Cf. CSJT; Sentencia N° 1193 de fecha 22/08/2017). Con base en tales fundamentos, la Sra. Agente Fiscal dictaminó que corresponde rechazar el planteo de inconstitucionalidad formulado contra los arts. 7 y 10 de la Ley 23.928 (modificados por el Art. 4 de la Ley 25.561). Los autos pasan a despacho para resolver.

## **CONSIDERANDO**

I. Liminariamente, debe advertirse que el planteo de inconstitucionalidad de los artículos 7 y 10 de la Ley N.º 23.928, modificados por la Ley N.º 25.561, ha sido ya objeto de tratamiento y decisión por parte de este Juzgado en los autos caratulados “Banco Credicoop Coop. Ltda. c/ Obando, Manuel Sebastián s/ Cobro Ejecutivo”, Expte N.º 5197/24, en sentencia dictada en fecha 22 de abril de 2025.

En dicho precedente, el planteo fue formulado también por la Dra. Graciela Raquel Werblud en representación del mismo Banco actor, y se resolvió su rechazo, con argumentos que resultan plenamente aplicables al caso de autos y que corresponde reiterar, a efectos de mantener un criterio uniforme y coherente con lo ya decidido.

En aquella oportunidad, se destacó que la legislación impugnada -concretamente los artículos 7 y 10 de la Ley N.º 23.928, sus modificatorias y el artículo 5 del Decreto de Necesidad y Urgencia N.º 214/2002- establece de manera clara y expresa la prohibición de toda forma de indexación, actualización monetaria, variación de precios o repotenciación de deudas dinerarias, con independencia de que exista o no mora del deudor. Asimismo, se consagra la inaplicabilidad de cualquier norma o cláusula contractual en contrario, y se extiende dicha prohibición incluso a relaciones jurídicas preexistentes.

Tal régimen ha sido reiteradamente convalidado por la jurisprudencia nacional y local. En particular, en la causa antes citada, se compartieron las conclusiones de un fallo de la Sala II de la Excma. Cámara Civil en Documentos y Locaciones, respecto a que: “ La Corte Suprema de Justicia de la Nación ante situaciones de gravedad socio-económicas reconoce al estado el derecho de intervenir en el orden patrimonial de los particulares limitando sus derechos en el tiempo y asegurando protección a la comunidad hasta el restablecimiento del tráfico normal de las relaciones en la sociedad (Fallos 313:2; 1530). En ese contexto los fundamentos expresados me llevan a propiciar el rechazo de los planteos de inconstitucionalidad de las Leyes n° 23.928, n° 25.561, y del decreto 214/02, por resultar un mero pronunciamiento abstracto, carente de eficacia para la solución del caso de marras.

El criterio ha sido mantenido en la sentencia CSJT N° 412/2017, que dijo: ‘Es indudable que la decisión de política económica de prohibir la indexación o repotenciación de deudas se encuentra todavía vigente en nuestro sistema jurídico positivo, de acuerdo a las normas contenidas en las Leyes N° 23.928 y N° 25.561; así como también es indudable que tal decisión de política económica no fue dejada de lado en ningún momento posterior a la sanción de tales leyes por ninguna decisión del Congreso Nacional’. A los fines de emitir opinión en el caso concreto de autos, debe ponderarse que el cambio de sistema económico fue establecido por el legislador por razones de orden público general de la sociedad y que tal desajuste se compensa con los intereses que se adicionan a los montos condenados, máxime teniendo en cuenta que se aplicaron la tasa activa para los créditos laborales, por todo lo cual se debe rechazar dicho planteo de inconstitucionalidad.” (CCDL - Sala 2 - Provincia de Tucumán -D.G.R.- Vs. Sossenko Miguel Julio Estanislao s/ Ejecución Fiscal - Nro. Expte: 2674/18 Nro. Sent: 348 Fecha Sentencia 28/11/2024).

En efecto, he explicado que el art. 7 y 10 de la Ley 23.928, que disponen la prohibición de cláusulas de indexación, forman parte de una política legislativa que responde a una decisión soberana del Congreso Nacional, en el marco de sus atribuciones constitucionales establecidas en los arts. 75 incs. 2 y 11 de la Constitución Nacional.

A mayor abundamiento, se ha señalado también que la eventual desactualización monetaria de un crédito no torna inconstitucional la norma, en tanto la Constitución Nacional no garantiza el mantenimiento automático del poder adquisitivo del dinero, ni asegura rentabilidad al acreedor. Lo

que protege es el derecho de propiedad frente a privaciones arbitrarias, irrazonables o de carácter confiscatorio, lo que -al igual que este caso- no se verifica de manera clara, concreta ni actual.

**II.** Cabe destacar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el precedente “Massolo” (Fallos: 333:447), ya se expidió respecto de la constitucionalidad de las normas cuestionadas. En esa oportunidad, el Máximo Tribunal Nacional sostuvo que “la ventaja, acierto o desacierto de la medida legislativa -mantenimiento de la prohibición de toda clase de actualización monetaria- escapa al control de constitucionalidad, pues la conveniencia del criterio elegido por el legislador no está sujeta a revisión judicial ()”.

Se advierte entonces que la Corte Suprema no ha modificado su tradicional postura desde la sanción de la Ley 23.928, manteniendo la validez constitucional de la prohibición de indexación, tanto en su modalidad directa como indirecta, línea jurisprudencial que ha sido objeto de tratamiento en la doctrina especializada. Así lo señala Paolantonio, Martín E., al analizar las obligaciones dinerarias en el trabajo “Indexación y moneda extranjera desde la perspectiva del análisis económico del derecho y la libertad contractual”, publicado en RCCyC, agosto 2025. La citada doctrina fue, asimismo, reiterada por el Máximo Tribunal en los precedentes “Puente Olivera, Mariano c/ Tizado Patagonia Bienes Raíces del Sur SRL s/ despido” (Fallos: 339:1583, sentencia del 08/11/2016) y “Romero, Juan Antonio y otros c/ EN – Ministerio de Economía y otro s/ proceso de conocimiento” (Fallos: 341:1975, sentencia del 08/12/2018).

A la luz del pronunciamiento emitido el 20 de febrero de 2024 en el expediente “Recurso de Queja N.º 5 – G., S.M. y otro c/ K., M.E.A. s/ alimentos” (CI-083609/2017/5/RH003, Fallos: 347:51), se advierte, en concordancia con lo previamente señalado, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación no ha abandonado su postura tradicional en la materia. En este precedente, el Máximo Tribunal sostuvo que: “Es arbitraria la sentencia que dejó sin efecto la actualización semestral de la cuota alimentaria fijada, con sustento en que ello violaba la prohibición de indexar deudas prevista por la ley 23.928, pues al eludir el análisis relativo a la aplicación de un mecanismo destinado a preservar en el tiempo el valor adquisitivo de la cuota alimentaria, sin que ello importe una actualización monetaria, indexación por precios, variación de costos o repotenciación de deudas en los términos de la citada ley 23.928, omitió brindar suficiente respuesta al planteo de la actora -quien así lo había solicitado en el escrito de inicio- y adoptó una interpretación de las normas civiles en juego que desatiende su finalidad y afecta los derechos fundamentales de la niña”.

**III.** Por otra parte, constituye doctrina consolidada que la declaración de inconstitucionalidad de una norma es una medida de última ratio, de extrema gravedad institucional, que sólo procede cuando se verifica una contradicción palmaria, manifiesta y de significativa entidad con una garantía de rango constitucional. A ello se agrega la carga procesal del peticionante de demostrar, de manera precisa y concreta, en qué consiste la incompatibilidad entre la disposición cuestionada y la cláusula constitucional que invoca como vulnerada, así como de acreditar el perjuicio efectivo, actual y particular que su aplicación genera en el caso concreto. En consecuencia, resultan inadmisibles los planteos de carácter abstracto, genérico o meramente dogmático.

Del mismo modo que lo acontecido en los autos “Banco Credicoop Coop. Ltda. c/ Obando, Manuel Sebastián s/ Cobro Ejecutivo”, Expte N.º 5197/24, ”, la parte actora no ha logrado acreditar los requisitos exigidos para la procedencia de una declaración de inconstitucionalidad. En efecto, no ha incorporado a la causa elementos de convicción que permitan verificar la existencia de un agravio concreto, actual y directo derivado de la aplicación de las normas cuestionadas. Tampoco ha demostrado, de manera técnica o cuantificable, cómo dichas disposiciones habrían impactado

negativamente en el valor del crédito reclamado, ni ha acompañado comparación alguna entre el resultado económico derivado de su aplicación y aquel que surgiría de aplicar métodos de cálculo alternativos. Por el contrario, manifiesta disconformidad con la normativa vigente sin establecer un vínculo claro y específico con las circunstancias del caso, ni acreditar un perjuicio cierto que justifique apartarse del marco legal aplicable

En virtud de lo expuesto, y en concordancia con la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes “Massolo” (Fallos: 333:447) y “Recurso de Queja N.º 5 – G., S.M. y otro c/ K., M.E.A. s/ alimentos” (Fallos: 347:51, 20/02/2024), así como con la jurisprudencia emanada de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (Sentencia N.º 1193 del 22/08/2017), corresponde rechazar el planteo de inconstitucionalidad formulado por la parte actora, toda vez que no ha demostrado en forma fehaciente la existencia de un perjuicio concreto, actual y particular que habilite su procedencia en el caso.

**IV.** En cuanto a las costas generadas por el tratamiento del planteo de inconstitucionalidad, corresponde imponerlas a la parte actora, en su calidad de vencida (conf. art. 26 Código Procesal Constitucional). Ello, sin perjuicio de que la parte demandada no haya presentado oposición formal ni contestado el traslado conferido, circunstancia que no obsta a la aplicación del principio objetivo del vencimiento, en tanto fue la accionante quien introdujo una pretensión que ha sido rechazada.

Por ello;

## **RESUELVO**

**I.- NO HACER LUGAR** al planteo de inconstitucionalidad formulado por Banco Credicoop. Coop. Ltda. contra los arts. 7 y 10 de la Ley 23.928, conforme lo considerado

**II.- COSTAS**, a la actora vencida (Art 26 Código Procesal Constitucional)

## **HAGASE SABER**

Actuación firmada en fecha 26/08/2025

Certificado digital:

CN=ARIAS GÓMEZ María Del Rosario, C=AR, SERIALNUMBER=CUIL 27239533308

La autenticidad e integridad del texto puede ser comprobada en el sitio oficial del Poder Judicial de Tucumán <https://www.justucuman.gov.ar>.



<https://expediente-virtual.justucuman.gov.ar/expedientes/c129c7f0-7e90-11f0-806c-23c47c3f6f99>



<https://expediente-virtual.justucuman.gov.ar/expedientes/c20d3f50-7e90-11f0-af31-1dce9afcc921>



<https://expediente-virtual.justucuman.gov.ar/expedientes/c275d7c0-7e90-11f0-9e5c-9b60b0e68366>